

Desempleo > SE ESPERA QUE LAS TASAS DE LA INDUSTRIA NO SUPEREN LAS DE 2016.

Para Corallo "es urgente" mejorar la competitividad de las empresas

» El pasado año 2016 ha sido un mal período para la industria, afirmó Washington Corallo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). La reforma fiscal y los costos que esto acarrea a las empresas, hacen que "se le complique la vida" a la industria, según dijo a CRÓNICAS, por lo que apuntó que se debe trabajar, en forma urgente, en la mejora de la competitividad de las compañías. Al mismo tiempo, mencionó el empuje que puede brindar el turismo al sector y llamó a no descuidar los vínculos de mercado con Argentina y Brasil.

Por: **Por Anahí Acevedo**
@PapovAnahi

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Corallo, consideró que es "urgente" mejorar la competitividad en las empresas, según dijo a CRÓNICAS, teniendo en cuenta la tendencia que acarrea el sector. El 2016 fue un período malo para la industria, opinó. Las áreas más perjudicadas durante 2016 fueron la lechería, el montaje de vehículos, el sector de plásticos, la metalúrgica, la pesca, piezas para automotores y la construcción.

Si bien el sector mostró signos de reactivación durante el tercer trimestre del pasado año luego de seis meses de caídas, los últimos datos recabados por la institución arrojan que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 se registró una desaceleración tanto en el mercado interno como en el mercado externo.

Días pasados, la CIU difundió un informe (ver página 14) donde se muestra que la capacidad instalada de la industria en el país "continúa estando por debajo de su potencial" debido, principalmente, a aspectos vinculados a la competitividad en el mercado externo y a la escasa demanda del mercado interno.

En este sentido, Corallo subrayó que la industria no muestra signos de mejoría, "a pesar de que el gobierno dice que la economía ha mejorado" e hizo énfasis en que se han continuado perdiendo puestos laborales. "Creo que es momento de ir pensando en medidas urgentes para mejorar la competitividad de Uruguay", dijo.

A la vez, aseveró que se debe apuntar

a no continuar perdiendo mercados internos y externos. "Cuanto más valor agregado hay, más caro se hace producir y más complicado es para las empresas", consideró.

El aumento de las tarifas fiscales que rige desde el pasado 1º de enero es otro de los aspectos que perjudican al sector, manifestó Corallo. En esta línea, expresó que la reforma fiscal, junto con los costos que se transmiten, hará que cada vez "se le complique más la vida" a la industria uruguaya.

"Nosotros competimos con el mundo, vendemos productos totalmente transables y somos tomadores de precios, por lo tanto, si no tenemos un dólar que acompañe el deslizamiento cambiario que tenga correlación con el IPC ni costos

"Si no tenemos un dólar que acompañe el deslizamiento cambiario y que tenga relación con el IPC ni costos razonables, junto con la reforma fiscal y los costos que se transmiten, cada vez se le va a complicar más la vida a la industria uruguaya".

razonables, se nos va a complicar", sostuvo.

Asimismo, aseveró que si bien entienden que había que aumentar las tarifas, el porcentaje podría haber sido menor



respecto a la electricidad, el combustible y el agua, elementos claves para la producción. "Entendemos que todo esto se podría haber abreviado y suavizado para que las empresas no sufran tantos estos avatares", reflexionó.

De esta forma, dijo que hubiese sido mejor que la tarifa a los grandes consumidores hubiese experimentado un porcentaje de aumento menor para evitar el sobre costo de producción y que el valor del producto bruto disminuyera.

Cuidar los mercados

Las expectativas de la industria están puestas, en parte, en el empuje que puede brindar el turismo para Uruguay. "Puede ser que fortalezca la demanda de los productos uruguayos", observó.

Asimismo, indicó que el Mercosur debería continuar siendo una herramienta clave y potente para el desarrollo de Uruguay, dado que es el mercado natural de nuestro país. Añadió que esperan que Brasil comience a mostrar signos de mejoría y aspiran a que Argentina empiece una recuperación económica de la mano de las medidas que está tomando el actual gobierno.

Asimismo, señaló que Europa también muestra una mejora, y que este destino configura un mercado importante para los productos que tienen un mayor valor agregado para Uruguay. Empero, aseveró que no se debería descuidar el vínculo con los países vecinos de Uruguay, que consumen, en su mayoría, productos tales como químicos, plásticos,

cueros y productos farmacéuticos.

Por último, destacó los puestos de trabajo que podría llegar a significar la construcción de una tercera planta de UPM en Uruguay, tanto por la mano de obra, como los productos que se utilicen en su edificación.

En esta línea, y respecto a las expectativas de empleo para 2017, Corallo señaló que la industria será el sector que perderá más puestos laborales, lo que perjudica en un mayor grado, puesto que es el sector "que más paga y capacita". No obstante, descartó que los trabajadores no puedan conseguir emplearse en otros rubros.

De todas formas, dijo que espera que el desempleo no supere a las tasas alcanza-

"El gobierno dice que la economía ha mejorado. Puede ser que haya mejorado algún sector, pero la industria, en particular, no muestra signos de mejoría".

das en 2016 y que desde CIU aspiran a que durante el corriente año se concreten proyectos importantes con los cuales Uruguay pueda mitigar la tendencia. Sin embargo, recordó que en los últimos cuatro años la industria tuvo más de 20 mil puestos de trabajo perdidos.

LA INSTALACIÓN DE LA TERCERA PASTERA

Nada es gratis

Las negociaciones con UPM no parecen fáciles. La empresa finlandesa ha endurecido sus exigencias, y el asentamiento a orillas del Río Negro tiene como contrapartida no sólo la condición de que se le construya la infraestructura para dar salida a su producción, sino que además pretende una regulación laboral diferente para el personal a su cargo y que Uruguay brinde una suerte de aval para conseguir la financiación que permita concretar su emprendimiento. También solicita ventajas impositivas mayores a las que hoy brindan las zonas francas.

VÍCTOR H ABELANDO

EL JUEVES 22 de diciembre, en una reunión convocada por el presidente del FA, Javier Miranda, para juntarse con "los cabezas de lista", más el presidente Tabaré Vázquez (no asistieron Vázquez, José Mujica, Constanza Moreira ni Eduardo Lorier), el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a los presentes que los principales problemas con la segunda pastera de UPM no eran, ni por asomo, los planteados por el trazado de la vía férrea en Montevideo. Astori sostuvo que los principales problemas con la empresa finlandesa residían en aspectos tributarios y de otro rango, aunque no entró en detalles.

El gobierno ha creado ocho grupos para estudiar la propuesta de los finlandeses, y éstos se especializan en temas que van desde aspectos logísticos, económicos, forestales, hasta ambientales. Además existe otro ámbito conformado por los ministros respectivos. En el plano instrumental, las conversaciones con los representantes de la firma se retomarán en la segunda quincena de enero. Pero mientras tanto han quedado algunos temas a estudio de los jefes del Ejecutivo.

Lo que se da por descontado es que la planta a instalarse en el centro del país, a orillas del Río Negro, gozará del régimen de zonas francas. Así ha ocurrido con las dos pasteras existentes en el país, la de Fray Bentos y la de Montes del Plata, en Conchillas, departamento de Colonia. De acuerdo al tratado de protección de inversiones (TPI) firmado entre Uruguay y Finlandia, los emprendimientos finlandeses deben recibir el trato más beneficioso otorgado a otras empresas, independientemente del origen. Por tanto las posibilidades de que no gocen de ese régimen son prácticamente nulas.

La inversión prevista por UPM es de 4.000 millones de dólares, la mayor de la empresa multinacional hasta el presente y también la más importante recibida por Uruguay en su histo-



UPM / FOTO: ALEJANDRO ARIGÓN - ARCHIVO

ria. A cambio de ella, el Estado uruguayo debe resolver la infraestructura para que la celulosa llegue al puerto y pueda exportarse. Lo cual supone una inversión en el ferrocarril que hasta ahora Uruguay no ha hecho, ni en los tiempos precedentes ni en los actuales.

Pero ¿cuáles son las exoneraciones mayores que UPM puede reclamar? Las zonas francas no pagan ningún impuesto nacional, salvo los aportes a la seguridad social. Una posibilidad es que la firma pida la anulación del pago del aporte patronal. Otra es que se rebaje el porcentaje de mano de obra nacional —tanto en la construcción como en el funcionamiento de la planta— del actual 75 por ciento a un 50 por ciento. Eso llevaría a reducir el monto con destino al Bps, porque los trabajadores extranjeros pueden elegir el régimen de pre-

del Plata, a la hora de comprar tierra para forestar. Sin embargo, de acuerdo a fuentes de Brecha, UPM se inclinaria por la asociación con productores nacionales, más que por cultivar sus propios eucaliptos.

También forma parte del cúmulo de exigencias que Uruguay firme una "carta de entendimiento" (así lo informó Búsqueda el jueves 29 de diciembre), lo cual permitiría a la empresa ofrecer un aval a la hora de buscar financiamiento para su emprendimiento. Ninguna inversión de este monto se hace con dineros propios, siempre se recurre a bancos, organismos de crédito internacional o fondos previsionales y de otro tipo que andan en la vuelta, y que pretenden que sus capitales tengan alguna garantía de seguridad y rentabilidad. Así ocurrió cuando la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, durante la primera administración frenteamplista. En aquel entonces Astori viajó a Estados Unidos para asegurar el respaldo uruguayo a la instalación de la pastera. En el actual gobierno uruguayo no parece haber disposición a dar ese paso hasta que no se cierre la negociación.

Otro elemento en cuestión es quién se hará cargo del transporte por ferrocarril hasta el puerto de Montevideo. En principio las autoridades nacionales descartan que el destino de la producción tenga como lugar de salida un nuevo muelle en Puntas de Sayago, pues concluyen que sería muy oneroso su dragado y hoy la actual terminal portuaria permite que el canal de salida (12,6 metros de profundidad) sea suficiente para que los barcos salgan completamente cargados y no deban repostar en otras terminales portuarias para trasbordar a navíos de mayor capacidad. En cuanto al ferrocarril, el Estado uruguayo se haría cargo de la construcción y arreglo de las vías, pero —de acuerdo a las fuentes— la empresa de Servicios Logísticos Ferroviarios (propiedad de la CND y AFE) no estaría en condiciones de trasladar la carga. Por lo tanto el transporte lo haría alguna empresa priva-

da a la cual el Estado uruguayo le cobraría un canon. De acuerdo a los cálculos establecidos, una carga anual de 2 millones de toneladas de celulosa dejaría de ganancia unos 75 millones de dólares anuales, negocio del cual estaría ausente AFE.

La exigencia de que Uruguay resuelva la infraestructura para la nueva planta (entre ferrocarril y carreteras y nuevas obras en el puerto se calcula que serían necesarios 1.000 millones de dólares) ha obligado al país a buscar inversores por todos lados. De ahí la gira que Vázquez realizó por China y España.

La novedad en estas negociaciones es que el inversor suma condicionantes para concretar la segunda pastera. Una razón para ello es el conocimiento de que Uruguay apuesta casi exclusivamente a la inversión extranjera directa (IED) como forma de dar un nuevo empuje a su economía (con la tercera planta de celulosa en construcción y en marcha, se calcula que el PBI podría crecer entre uno y dos puntos). Y también cada vez es mayor la competencia por captar el flujo de capitales hacia la región, por lo cual, si bien Uruguay ofrece ventajas naturales para este tipo de emprendimientos, los inversionistas buscan tanto ventajas tributarias como reducir los costos laborales, de forma de asegurar un retorno más rápido de lo invertido (véase, a propósito de esto, la apertura de Política).

La tendencia mundial a la deslocalización de las empresas de sus países originales está impulsada por la búsqueda de escenarios menos costosos, en todos los sentidos. No es de descartar —así parece suceder con algunas multinacionales que, establecidas en suelo uruguayo, amenazan con emigrar hacia otros territorios más desregulados en todos los sentidos, especialmente en el laboral— que el asentamiento de la IED pretenda replicar el fenómeno de las maquiladoras. En esa dirección parece estar presionando UPM, y por eso las resistencias que sostiene el gobierno uruguayo. ■

Según estimaciones de Ariel Rodríguez Machado, presidente en funciones del Tribunal de Cuentas

“Gran rigidez” del gasto público solo permite cortar 3,4% del total

Ni las familias ni los Estados pueden gastar más dinero del que les entra de manera indefinida, si bien circunstancialmente pueden cubrir esa diferencia —el “déficit”— tomando prestado. Buscando un cierto equilibrio en sus finanzas, el camino que deben recorrer supone aumentar los ingresos (consiguiendo un segundo empleo, trabajando horas extra o un incremento salarial en el caso de los hogares, o subiendo la carga tributaria por el lado del gobierno) o recortar los egresos.

Para el sector público uruguayo, la alternativa de gastar menos está fuertemente restringida por la propia composición del presupuesto. El margen por ese lado es de apenas 3,4% de todo el gasto, según un cálculo para 2000-2015 realizado por Ariel Rodríguez Machado, quien actualmente preside de forma interina el Tribunal de Cuentas.

La estructura del gasto presupuestal en Uruguay presenta una “gran rigidez” y los únicos dos componentes sobre los cuales se podría actuar para modificar su magnitud, sin afectar los planes sociales vigentes, son los gastos de funcionamiento e inversiones, sostiene en un análisis al que accedió **Búsqueda**.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha reconocido esa rigidez como un problema. “Es una ne-

cesidad absolutamente imprescindible para el país” mejorar el resultado fiscal, pero “en Uruguay es muy difícil reducir el gasto porque hay un enorme porcentaje que es endógeno”, dijo el pasado jueves 29 de diciembre en Radio Sarandí. La alternativa que queda es aumentar los ingresos subiendo impuestos y/o tarifas públicas, medidas que, de hecho, entraron en vigor este domingo 1º. Es lo que desde la oposición política algunos sindicatos y analistas señalan como un “ajuste fiscal” y el gobierno identifica como una acción de “consolidación” de las finanzas públicas, que en los 12 meses a noviembre de 2016 presentaron un déficit de U\$S 1.981 millones, equivalente a 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI), según las cifras que difundió el Ministerio de Economía el pasado viernes 30. Eso es tres décimas de punto porcentual más que en el año finalizado en octubre por el deterioro en las finanzas del gobierno central, ya que los números de las principales empresas públicas registraron una mejora.

Hoy los entes “son el área del gobierno consolidado que mejor resultado fiscal tiene” porque la reducción de costos y el ordenamiento de las inversiones fue “muy importante”, afirmó el ministro.

Según indica Rodríguez Machado en su análisis, los déficit pre-

supuestales aprobados por el Parlamento en cada Rendición de Cuentas se ubicaron entre 1,5% y 8,9% del PBI. “Esta combinación de factores —estructura de gasto rígida o inflexible y déficit fiscales estructurales— hace muy difícil la aplicación de políticas anticíclicas, en

pan conceptos de gasto como intereses de deuda, subsidios y subvenciones, diversos créditos o transferencias para cubrir el déficit de la seguridad social.

En pesos corrientes, el presupuesto en 2015 fue 564% mayor que en 2000, lo que desconta-



un país donde persisten determinadas necesidades sociales y de infraestructura insatisfechas”, señala.

■ Gasto inflexible

El Presupuesto nacional, que Uruguay define para períodos quinquenales y revisa anualmente a través de las Rendiciones de Cuentas, abarca a los tres Poderes del Estado, los organismos de protección social, contralor, enseñanza, salud y otros como Meteorología, la Fiscalía General y la Junta Anticorrupción. También a los incisos funcionales u operativos que agru-

cios minoristas arroja un incremento real de 105%. En dólares, aumentó de U\$S 4.518 millones a U\$S 7.720 millones (201%), según el análisis de Rodríguez Machado, quien estuvo al frente de la Contaduría General de la Nación entre 2005 y 2010, luego fue adjunto a la Gerencia Administrativa de la Administración de Servicios de Salud del Estado, y desde mayo de 2013 a marzo de 2015 ocupó el cargo de director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública.

Como porcentaje del PBI, el presupuesto global se amplió de 20,5% en 2000 a 25,7% en 2015. El promedio del período fue 25,6%. El costo de personal significó 7,3% del Producto.

● **Estructura.** En promedio del período 2000-2015, el presupuesto tuvo la siguiente estructura: salarios 28%, transferencias a la seguridad social 22%, subsidios y transferencias 16%, servicio de deuda 14%, gastos de funcionamiento 10%, inversiones 8% y suministro 2%. “Más del 90% corresponde a conceptos relativamente rígidos, cuya modificación, si bien es posible”, resulta “difícil” sin llegar a generar “conflictos salariales importantes”, observa el contador.

Luego desarrolla el análisis para estas categorías de gasto.

Señala que el costo salarial está asociado a la cantidad de sueldos pagados y su monto (precio). Para Rodríguez Machado, el análisis respecto a la cantidad, calidad y características de los funcionarios “es una tarea pendiente de toda la administración, sobre la cual se “ha escrito mucho”, se hizo “poco”, y “tiene relación con todos los procesos de reestructura que se han encarado a través

de décadas”. Si se podría llegar o no a reducir la plantilla futura de asalariados y del gasto emergente es un asunto que deberá estudiarse, agrega.

El precio de los salarios se rige por acuerdos “cada vez más rígidos regulados por normas legales”, apunta.

Respecto a las transferencias a la seguridad social, Rodríguez Machado indica que su rigidez está asociada con la estructura etaria de la población y con la relación activo-pasivo, que en Uruguay “hace inviable un sistema de jubilaciones sin apoyo del Estado”. También influye la indexación de las pasividades al Índice Medio de Salarios y la periodicidad de sus ajustes, simultáneas con los que se establezcan para los funcionarios públicos. “Este elemento introduce una mayor rigidez al gasto de la seguridad social que hace inviable su reducción o congelamiento en un corto plazo”, agrega.

Dentro de los subsidios y transferencias figuran los que reciben los gobiernos departamentales por disposición constitucional, que actualmente son 3,33% de lo recaudado por impuestos nacionales. Hay, además, transferencias al sector privado —básicamente certificados de crédito que otorga la Dirección General Impositiva o el Banco República—, un “elemento rígido que es muy difícil de modificar puesto que afectaría muchos sectores de la economía y la sociedad”, observa el contador.

El resto de este capítulo corresponde a transferencias a instituciones sin fines de lucro vinculadas con la salud, cultura o deporte, por ejemplo, u otras de Derecho Público no estatal que sustentan su presupuesto en dichos aportes desde Rentas Generales.

Sobre los intereses y comisiones de la deuda, Rodríguez Machado plantea que si bien redujeron su peso con relación a su volumen, el crecimiento del pasivo nominal del Estado determina que siga siendo una porción importante del gasto presupuestal. En los últimos años se estabilizó en 9%, y “es un ejemplo de cómo se puede modificar la estructura del Presupuesto a través de políticas económicas y sostenibles”, opina. Sin embargo, admite que hacia delante es “impensable” poder reducir más en el corto plazo, dado que el incremento de la deuda “oficia como fuente de financiamiento de déficit fiscales estructurales” y el país, por el “alto nivel

de confiabilidad alcanzado”, ya paga tasas de interés relativamente bajas.

El gasto de funcionamiento es “uno de los componentes más rígidos y estables en su proporción”, y osciló entre 8% y 11% en los 16 años que abarcó su estudio. Una parte corresponde a gastos que hacen a la gestión administrativa, como papelería, útiles de oficina, pasajes, viáticos, arrendamientos, etcétera. Otros son “gastos discrecionales” que podrían ser abatidos, lo que requiere de un análisis de composición, naturaleza y oportunidad de algunas erogaciones en función de metas y objetivos, sostiene.

Según Rodríguez Machado, los suministros, como subcategoría de los gastos de funcionamiento, son básicamente inflexibles a la baja y tratar de hacerlo “parecería inconducente” dado que abarcan mayormente transferencias dentro del propio sector público.

El rubro de inversiones (8% del presupuesto) “está sobredimensionado” —según el estudio del actual titular del Tribunal de Cuentas—, ya que algunas partidas de funcionamiento (mantenimiento) son contabilizadas como inversión. “Este componente es tradicionalmente utilizado como válvula de ajuste para controlar el gasto presupuestal en época de crisis financiera, en razón de que es un gasto que no afecta el funcionamiento de la administración en forma traumática”, si bien ello puede inducir a un menor nivel de actividad económica o mayor desocupación, agrega.

Concluye que a corto plazo es posible influir solamente sobre una porción inferior a 10% del Presupuesto global, mediante recortes en los egresos de funcionamiento y en inversiones. Esas dos categorías representan 18% del total, pero la mayor parte “es un gasto inercial que se encuentra comprometido”, apunta el contador.

A valores de diciembre de 2015, los gastos de funcionamiento equivalían a U\$S 721 millones. Estimando una flexibilidad de 25%, se podría influir sobre un gasto anual de U\$S 180 millones, calculó. Por el lado de las inversiones (U\$S 870 millones a la misma fecha), asumiendo una flexibilidad de 10% se actuaría sobre un monto de U\$S 87 millones. Con tales supuestos, el total del gasto que se podría reducir rondaría los U\$S 260 millones. Eso es 3,38% del presupuesto total de unos U\$S 7.700 millones.